

## 5. La iniciativa extranjera en la agropecuaria de Santa Cruz<sup>19</sup>

En este capítulo se hace una breve descripción de las tres etapas de la presencia brasilera en Bolivia, la inicial y exploratoria de los años ochenta del siglo pasado, la segunda y más importante de compras de tierras principalmente para el cultivo de la soya que se inicia el año 1993 y concluye a principios del nuevo siglo. La última o tercera etapa que se inicia por los años 2005 y 2006 hasta el 2010, principalmente para la compra de tierras de uso ganadero. Además de la renovada presencia brasilera, en este último período de tiempo destaca la creciente presencia de inversionistas argentinos y en mucha menor medida la de los colombianos, pero ya no se trata solamente de tierras para uso agrícola sino principalmente ganadero.

### 5.1. La hegemonía brasilera

Con diferentes matices y enfoques, desde hace ya dos décadas se venía anticipando primero los intentos exploratorios, luego la fuerte presencia y finalmente la hegemonía de la propiedad de las mejores tierras agrícolas de Bolivia en manos de capitales y ciudadanos extranjeros, particularmente brasileros. De manera muy distinta a los asentamientos de colonizadores inmigrantes extranjeros de nacionalidad japonesa de principios de los años 1950

---

19 Este acápite se basa en dos principales fuentes de información. Por un lado entrevistas propias a productores, directivos de instituciones y personalidades del departamento de Santa Cruz realizadas en agosto de 2010 y por otro, entrevistas realizadas por la ciudadana brasilera Heloísa Marques Gimenez el año 2009 en oportunidad de la elaboración de su tesis de Maestría en la Universidad de Sao Paulo, cuya utilización ha sido debidamente autorizada por la autora. Esta tesis y sus entrevistas están publicadas en formato digital en la página web de esa universidad. Ver bibliografía consultada.

y de los menonitas unos años después, la presencia brasilera tiene diferentes connotaciones en tres etapas distintas.<sup>20</sup>

La primera inmigración brasilera de los años 80 tuvo un impacto marginal, aunque comenzó a experimentar con la soya en tierras alquiladas o en asociación con algunos productores bolivianos; los menonitas ya antes habían logrado experiencia y resultados satisfactorios con este cultivo. Es recién como efecto de las políticas públicas impulsadas por el proyecto Tierras Bajas de Este<sup>21</sup> y la consecuente habilitación de suelos, electrificación rural, construcción de caminos troncales, y una extendida oferta de tierras muy baratas y productivas, que la segunda etapa de inmigración brasilera compra tierras desde el año 1993 aproximadamente hasta el 1999 en la región del Este de Santa Cruz. Sin embargo, a los pocos años del inicio de esta migración se produjeron tres años continuos de condiciones climáticas adversas que hicieron que muchos inversionistas nacionales y extranjeros abandonen el negocio. Muchos empresarios bolivianos no pudieron honrar sus créditos en la banca y vendieron muy baratas sus tierras, situación que fue aprovechada por los extranjeros con mayor disponibilidad de capital propio. Algunos pocos brasileros regresaron a su país dejando en Bolivia deudas sin pagar por una suma aproximada de 20 millones de dólares. Los brasileros exitosos que se quedaron en Santa Cruz y los que llegaron poco después accedieron gradualmente a las mejores tierras hasta controlar la mayor superficie destinada al negocio sojero. Desde el año 2005 se aprecia una nueva oleada, una tercera etapa de inversionistas brasileros, pero esta vez además en busca de tierras de uso ganadero.<sup>22</sup>

20 El año 2004 el entonces director del INRA, Alcides Vadillo, comentó ante un grupo de periodistas que era “una pena que las mejores tierras de Bolivia estén en manos de ciudadanos brasileros”, declaración que provocó la preocupación de estos principales inversionistas extranjeros y la invitación para que el Director se reuniera con ellos en la ciudad de Santa Cruz. En esa oportunidad pidieron al gobierno reglas claras y duraderas para estimular mayores inversiones extranjeras. A los pocos meses el Director fue cambiado.

21 El proyecto Tierras Bajas del Este fue promovido y financiado por el Banco Mundial y la KFW de Alemania mediante convenio de crédito 211-Bo por 43 millones de dólares. Fue suscrito el 7 de mayo de 1990 y tenía como objeto incrementar la producción agropecuaria y agroindustrial principalmente orientada a la exportación de soya y sus derivados, alcanzar el manejo sostenible de los recursos naturales y apoyar el acceso de pueblos indígenas a sus territorios. El proyecto fue cerrado luego de siete años, el 31 de diciembre de 1997. El informe final de cierre establece que el proyecto fue altamente exitoso al haber superado las metas previstas.

22 Mario Arrieta en el año 1990, ya vislumbraba que la modernización capitalista de la agropecuaria cruceña imitaría al modelo agroexportador del Brasil. Más adelante, Miguel Urioste (2001) señalaba que el modelo del agronegocio sojero basaba su rentabilidad en los bajos precios de la tierra y en la facilidad del acceso de los extranjeros -especialmente brasileros- prácticamente sin ningún control ambiental, adelantaba también que era previsible la pronta pérdida de fertilidad de los suelos. Mamerto Pérez en su trabajo del año 2007 daba cuenta certera de la tendencia hacia el predominio extranjero, especialmente brasilero y posteriormente argentino, de la propiedad de la tierra de uso agrícola en Santa Cruz. Gustavo Medeiros (2008) profundiza el análisis económico del crecimiento vertiginoso del cultivo de la soya y la participación de los brasileros en ese proceso.

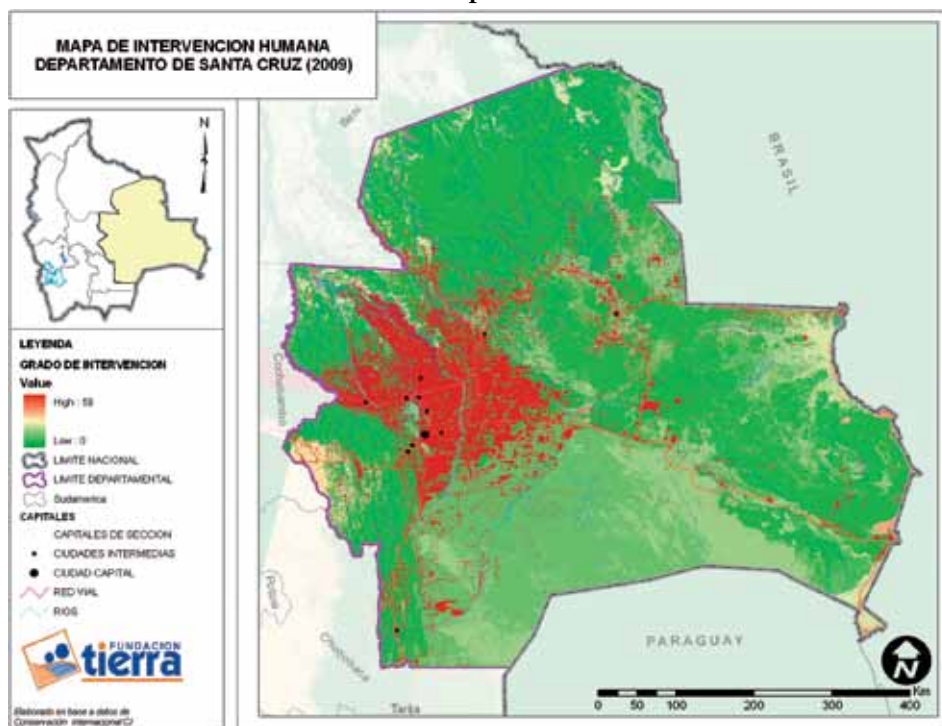
Es evidente que el cultivo de la soya en Bolivia no se habría desarrollado a los niveles actuales, sin la presencia de agricultores inversionistas brasileros y de otros extranjeros que compraron tierras en Santa Cruz y trajeron dinero, conocimientos y tecnología. Encontraron aquí un margen de utilidades significativamente mayor que el que obtenían en Brasil o en otros países de origen, precisamente por el bajo precio de la tierra, el bajo precio del dólar como moneda de transacción corriente y de libre convertibilidad, los casi inexistentes impuestos que se pagan por la tierra y por las exportaciones, las facilidades de un mercado preferencial cautivo hasta el año 2008 en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la cordial acogida en círculos de la clase media cruceña, no solamente en los niveles empresariales sino también en ámbitos de clubes sociales y fraternidades.

Estos inmigrantes brasileños -de manera diferente a los japoneses y menonitas- se integraron plenamente a la élite local, no solamente en la esfera económico-productiva, sino también en algunos niveles políticos regionales, aunque de manera muy cautelosa y poco visible. De hecho dos de los principales sojeros brasileros forman parte de la directiva de nueve personas que tiene la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO), aunque para ello fue necesario modificar sus estatutos. Hoy en Santa Cruz está consolidada una élite agroindustrial brasilerera con algunos niveles de poder político muy sutil y llama la atención que su notable presencia económica y sus influencias en el plano sociopolítico local no ha sido hasta ahora objeto de estudio (Marques Gimenez 2010). Queda claro que la presencia líder brasilerera en el agronegocio en Bolivia es muy distinta a la presencia de otros extranjeros, cuyo origen migratorio se remonta a los años 50 del siglo pasado caracterizada por pequeños productores japoneses ya ahora plenamente integrados cultural y socialmente en la región y desde los años 60 los menonitas que se mantienen completamente aislados dentro de los límites de sus colonias y que practican métodos depredadores del medio ambiente.

Para poseer tierras en Bolivia y obtener créditos en los bancos, los extranjeros tienen que naturalizarse bolivianos o casarse con mujeres bolivianas, cosas que muchos han hecho ya que de esa manera acceden además a los círculos sociales locales. Sin embargo, la mayoría de estos mismos brasileros exitosos en Bolivia, no se han desprendido de sus tierras y agronegocios en Brasil, que continúan administrando en un permanente ir y venir entre Santa Cruz en Bolivia y en los Estados del Matogrosso y Matogrosso del Sur en Brasil, principalmente. Los brasileros en Bolivia, durante las dos últimas décadas, consiguieron entender y ser parte muy activa del mercado de tierras y se mantuvieron siempre en las de mejores rendimientos, en las más productivas. Al principio en la región del Este, más caliente y seco, y luego en la región integrada del Norte más húmedo y con un régimen de lluvias que admite doble cosecha anual, en invierno y verano. Su

nivel de acumulación de capital les permitiría pensar en expandirse hacia zonas ganaderas de Santa Cruz fronterizas con el Brasil, el Beni y eventualmente a otros países vecinos, particularmente la amazonía peruana (Marques Gimenez 2010). A la importancia decisiva que ya han adquirido los brasileros, se va sumando de manera nítida la de los argentinos, ambos de la región del Mercosur, aunque posiblemente con intereses particulares y hasta contradictorios (Pérez 2007 y Medeiros 2008). No está muy claro si esta presencia extranjera obedece al interés estrictamente particular de individuos o personas aisladas o más bien al de empresas ya instaladas tanto en Brasil como en Argentina. Probablemente se trata de una combinación de ambas y a los rebalses de productores brasileros o argentinos que encontraron que tenían más oportunidades exitosas de expansión en Bolivia que en sus países de origen.

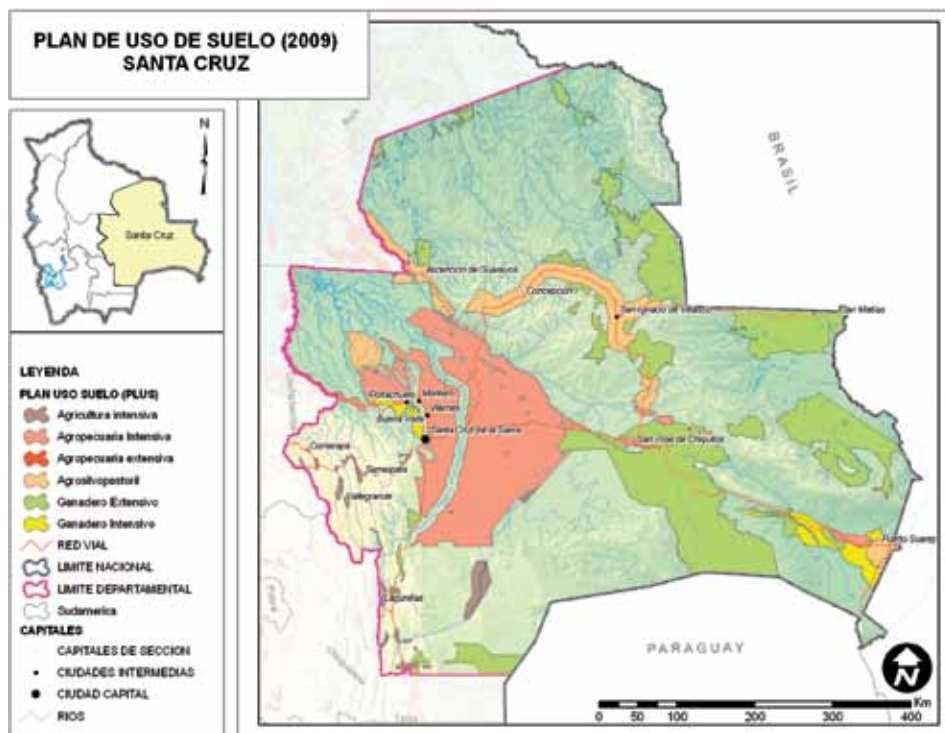
Mapa N° 4  
Intervención humana en el Departamento de Santa Cruz (2009)



En el año 2007 se advertía que el número de ciudadanos brasileros con tierra en Bolivia no era significativo (contrastando con su abrumadora presencia numéri-

ca en el Paraguay). En ese entonces se señalaba que no más de 250 propietarios empresarios brasileños poseían en promedio cada uno a 1.000 hectáreas. El grupo Mónica Norte poseía en el año 2005 cerca de 7.900 hectáreas cultivadas de soya y 1.700 de maíz. La empresa argentina El Tejar tenía alquiladas y cultivadas 5.700 hectáreas. Reportajes periodísticos del 2005 dan cuenta que 75 empresarios, la mayoría extranjeros tienen 250.000 hectáreas a un promedio de 3.330 hectáreas por empresario (Pérez 2007). El portavoz de la institución empresarial Unisoja declaró que *“el año 2005 los tres mayores productores de soya son extranjeros y entre ellos cosechan 180 mil toneladas de soya lo que supondría (a un rendimiento promedio de 3 toneladas por hectárea) que cada uno posee por lo menos 20 mil hectáreas”*. Pérez estimó que la cantidad de grandes empresarios que cultivan más de 1.000 hectáreas no supera los 300, de los cuales la mayoría son brasileños, con un núcleo poderoso no mayor de 100 productores, quienes poseerían predios de entre 3.500 a 8.000 hectáreas. Comparando los Mapas 4 y 5 se observa como los cultivos agrícolas tienden a exceder cada vez más los límites de uso determinados en el PLUS.

Mapa N° 5  
Plan de Uso de Suelo (PLUS) Santa Cruz 2009



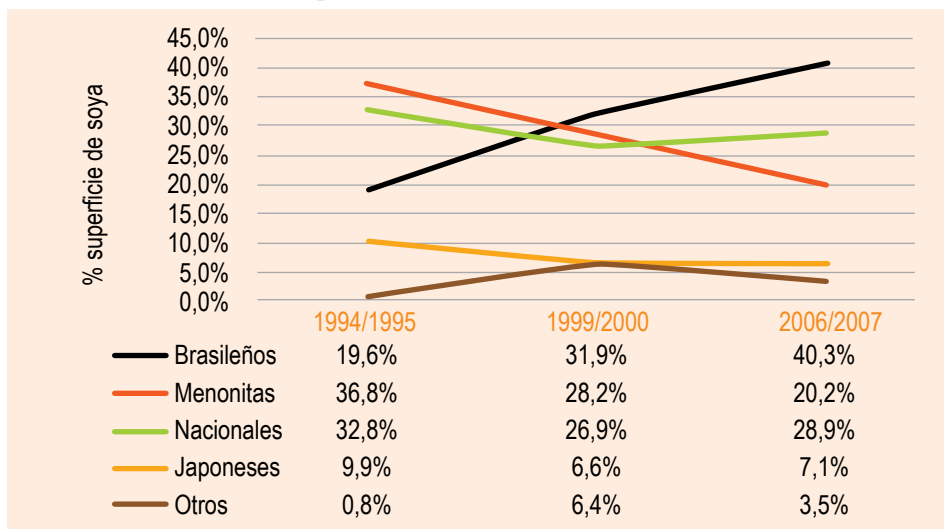
Desde hace muchos años la información estadística que ofrece ANAPO no permite el análisis del comportamiento por tipo de productor (pequeño, mediano, grande) clasificada por nacionalidad (boliviano, brasilero, otros extranjeros). Pareciera que el propósito es no permitir la identificación precisa de la cada vez mayor presencia extranjera en el agronegocio sojero, pero particularmente de la propiedad extranjera de grandes extensiones de tierra. No es casual tampoco que hasta el año 2010, no se conozcan datos oficiales del INRA sobre el estado de avance del saneamiento de las tierras y del catastro de las unidades empresariales grandes de ese departamento, clasificados por tamaño, tipo y nacionalidad del propietario con información de precios catastrales y de mercado. En general la información sobre este tema continúa siendo incompleta y obliga a utilizar metodologías aproximativas para aventurar cálculos estimativos.<sup>23</sup>

Además, el poder de los extranjeros no solamente está concentrado en la propiedad de la tierra y en el cultivo de oleaginosas en sí mismos, sino en la propiedad de importantes casas comerciales importadoras dedicadas a la provisión de insumos y maquinaria, agroquímicos, silos y almacenes, así como en las industrias transformadoras de aceite y derivados (Marques Gimenez 2010).

---

23 El informe de gestión del presidente de ANAPO del año 2009, señala que la inseguridad jurídica sobre sus tierras es el aspecto que más perjudica al sector y por tanto es un tema prioritario de la agenda que han fijado los productores con el gobierno. Han logrado establecer una mesa de trabajo permanente en la temática de tierras, con la participación del Viceministerio de Tierras, el INRA, CONFEAGRO, CAO y ANAPO, *“para subsanar las normativas legales que generan inseguridad jurídica”*. Se ha consensuado el Decreto sobre las relaciones laborales de servidumbre o de trabajo forzoso con la promulgación del DS. 0388 que aprueba el reglamento para su aplicación por parte del INRA. También se ha iniciado un trabajo coordinado con el Viceministerio de Tierras para agilizar el proceso de titulación de tierras para medianas y grandes propiedades de los asociados a ANAPO, sin embargo la opinión pública no conoce de estos avances.

**Gráfico N° 6**  
**Superficie cultivada de soya (%) según origen del productor,**  
**periodo 94/95, 99/00 y 06/07**



Fuente: Elaboración propia en base a ANAPO 2008.

El gráfico 6 muestra cómo desde hace 15 años los inversionistas brasileños van aumentando progresivamente sus tierras sembradas de soya hasta llegar a un 40% del total nacional cultivado a costa de la disminución relativa de los otros grupos de productores.

De esta manera, los brasileños entraron al mercado de tierras boliviano desde una situación privilegiada, prácticamente sin competencia. Muchos empresarios bolivianos -que acabaron vendiéndoles sus mejores tierras- que como ya se dijo, estaban endeudados como consecuencia de la hiperinflación de los años 80, los bancos no les daban nuevos créditos porque sus tierras o ya estaban hipotecadas y sus créditos en mora, o no estaban debidamente tituladas y no tenían seguridad jurídica. En ese entonces (años 90) Brasil ya había experimentado más de una década de incursión exitosa en el agronegocio sojero, existían técnicos y profesionales brasileños formados y capacitados y con gran apoyo de los centros estatales de investigación (EMBRAPA) y vínculos con las empresas privadas brasileñas; además estos empresarios estaban plenamente integrados al mercado mundial y al agronegocio de los *commodities*. Fueron algunos de esos técnicos y profesionales, atraídos por el muy bajo precio de las tierras, los que emigraron a Bolivia. Ese es el “equipaje” que trajeron los inmigrantes brasileños. (Marques Gimenez



2010). En este contexto, “los brasileros partían de la ventaja de ser extranjeros” (Soruco 2008).<sup>24</sup>

En este proceso de expansión de la frontera agrícola de Santa Cruz, el subsidio estatal al precio del diesel y el congelamiento de su precio desde hace dos décadas es clave. Se estima que el consumo promedio de diesel por cada hectárea de soya entre la preparación del terreno, la siembra y la cosecha es de aproximadamente 40 litros. El subsidio gubernamental al diesel es de medio dólar por litro, lo que implica que todos los productores de soya, el año 2009, con una superficie sembrada de un millón de hectáreas, incluidos los brasileros, están recibiendo un subsidio cercano a 20 millones de dólares. Si se considera las siembras de verano e invierno, la suma es mayor.

De acuerdo a la estudiosa brasilerera Heloisa Marques Gimenez, la contundente presencia brasilerera en la agropecuaria cruceña no sería resultado de una estrategia de geopolítica pública de expansionismo del Estado del Brasil, sino mas bien fruto de un movimiento migratorio espontáneo, individual, y producido principalmente por el bajo precio de la tierra a principios de la década de los 90, muy bajo comparado con el precio en el Brasil y por lo tanto accesible a productores brasileros pequeños y medianos. Sin embargo, la misma investigadora concluye que eso no querría decir que ese núcleo de productores no haya conformado una elite de poder local y que cuente con conexiones internacionales, con el ramo productivo respectivo en el Brasil. En realidad no habría una planificación previa y facilitada por el Estado brasilerero para promover migraciones y asentamientos humanos en Bolivia, pero ahora que sus connacionales están instalados en Bolivia, el Estado brasilerero los protege y apoya. Los brasileros organizados en grupos, se saben respaldados y protegidos por su gobierno y por el gobierno boliviano y posiblemente ocurre algo parecido con los argentinos. No así los productores bolivianos.

Más recientemente, en los últimos cinco años, se está produciendo otro fenómeno migratorio, esta vez vinculado a ciudadanos argentinos que también se dedican a la compra de tierras muy por debajo del valor en su país. La diferencia entre brasi-

---

24 Un aspecto todavía no estudiado en Bolivia es la coincidencia entre el salto productivo del sector agroexportador cruceño liderado por inmigrantes brasileros firmemente apoyados por su gobierno, especialmente el del presidente Lula, y la exacerbación del proyecto político autonomista de la región de Santa Cruz en recientes años. Tampoco se ha estudiado todavía la eventual relación entre la legalización del neo latifundismo establecida en la nueva CPE de Bolivia y las posibles gestiones políticas de la Cancillería brasilerera a favor de sus connacionales terratenientes en Bolivia. Declaraciones de algunos de los ciudadanos brasileros afincados en Santa Cruz indican que nunca han estado tan bien tratados en Bolivia como durante los gobiernos de Lula Da Silva y de Evo Morales. En todo caso, parecería que los artículos 315 y 398 de la nueva CPE están hechos a la medida expresa de los intereses de estos inversionistas extranjeros en las tierras, el agronegocio y el agropoder.



leros y argentinos es que los brasileros son los precursores en la adquisición de tierras y en la introducción de tecnologías de avanzada en el cultivo de oleaginosas, y actúan en grupos para colaborar. Mientras que los argentinos son los “recién llegados”, y su accionar es más individualizado y no han introducido tecnología propia. Las compras de tierras por parte de extranjeros durante el último quinquenio (2005-2010) habrían estado más orientadas inicialmente hacia una eventual y futura exportación de agro combustibles dado que ha fenecido la ventaja arancelaria que la CAN ofrecía a Bolivia y que permitía encontrar mercados cautivos para la soya y sus derivados en la región andina. Si eso fuera así, se estaría produciendo un círculo vicioso que consiste en que Bolivia importa diesel de Venezuela, subsidia su precio con casi medio dólar el litro, que es mayormente consumido por la agroindustria cruceña, la cual se aprestaría a producir agro combustibles (diesel de la soya y etanol del alcohol de caña) para la exportación. Se trataría de un negocio de suma cero: consumir diesel importado subsidiado por el Estado para producir y exportar agro combustibles a costa de la cada vez mayor superficie de bosque nativos irreversiblemente deforestados. Sin embargo la explícita oposición del gobierno boliviano a la producción de agro combustibles habría frustrado estas expectativas de los inversionistas, especialmente de los argentinos.

Como la superficie sembrada de soya en Bolivia bordea el millón de hectáreas y los brasileros siembran casi un 35% de ellas, y dado que el alquiler de tierras por parte de los brasileros es marginal, es fácil deducir que -únicamente en tierras destinadas a las oleaginosas- los brasileros son dueños de cerca de medio millón de hectáreas de las mejores tierras agrícolas de categoría I (uso agrícola intensivo) y II (uso agrícola extensivo), sin contar aquellas que están en descanso o rotación, ni tomar en cuenta otras tierras destinadas a otros cultivos y las de uso ganadero, que usualmente son superficies mucho mayores.

## 5.2. La percepción de los actores

En una entrevista realizada por Heloisa Marques, un brasilerero contó lo siguiente: *“la primera propiedad que yo compré en el año 1993, la pagué a 90 dólares la hectárea, o sea un regalo del cielo. Por la segunda propiedad pagué 190 dólares la hectárea y por la tercera 850 dólares la hectárea. Ahora mis tierras, unas tres mil hectáreas, valen por lo menos a dos mil dólares la hectárea. Eso fue lo que nos llevó a los brasileros a la prosperidad”*. Según cuenta este mismo ciudadano brasilerero *“la posesión de la tierra por brasileros es mucho mayor que la superficie destinada al cultivo de la soya, estamos también en la actividad ganadera y forestal, incluso en las zonas de frontera en la faja de prohibición de propiedad para extranjeros en los 50 kilómetros del límite fronterizo, restricción que se supera contrayendo matrimonio con ciudadanas bolivianas”* (Marques Gimenez 2010).

*“Este gobierno apuesta muy positivamente por el agronegocio”, dice otro ciudadano brasilero entrevistado... y continúa “ahora, en Bolivia ningún ciudadano brasilero con inversiones en el agronegocio tiene problemas de tierras con los invasores. El gobierno hace respetar nuestros derechos”... “Al igual que en Brasil, la ley de tierras de Bolivia se aplica sólo para los enemigos políticos del gobierno, pero no contra los extranjeros, porque hay temor de conflictos diplomáticos, por eso yo estoy más o menos tranquilo”... “La ley de Bolivia es igual a la del Brasil, tienes que cumplir la Función Económico-Social (FES) de la tierra, sino tu tierra es revertida por el Estado, pero esto no se cumple en ninguno de los dos países. En este sentido vivimos con algún temor de que la ley se aplique”... “También tenemos temor de que la reglamentación de la CPE y la futura ley de tierras que el gobierno tendrá que aprobar afecten nuestros intereses y nuestras propiedades. Pero nosotros tenemos la garantía de nuestro gobierno, igual que los “brasiguayos” (brasileros en Paraguay). Si hay problemas, nuestro gobierno nos va a defender” (Marques Gimenez 2010).*

Hay dos tipos de reacciones de los productores agropecuarios nacionales. Algunos se sienten desplazados por los inversionistas brasileros, que vienen con capital y conocimientos tecnológicos. Expresan recelo por las grandes extensiones de tierras compradas y por los altos rendimientos y utilidades que estos obtienen. Sienten que su principal patrimonio les está siendo arrebatado por los extranjeros y por los campesinos sin tierra que emigran de los Andes y los indígenas originarios de las tierras bajas. Sin embargo, otros alquilan sus mejores tierras a argentinos y brasileros y viven de sus rentas sin mayor esfuerzo. Solamente alquilando dos mil hectáreas, a un promedio de 180 dólares por hectárea por año, se obtiene una renta anual de 360.000 (trescientos sesenta mil) dólares libres de impuestos. De acuerdo a ley, mientras las tierras estén trabajadas y cumplan la FES el dueño -el arrendador- no tiene de que preocuparse.

En Santa Cruz, en general, se tiene el criterio de que toda inversión extranjera es buena ya que trae capital y conocimientos, tan necesarios para poner en producción los abundantes recursos naturales de la región. Todos coinciden en que son los brasileros los que más han aportado al crecimiento vertiginoso de los cultivos de soya y de las industrias transformadoras de aceite y otros derivados. En Santa Cruz, las clases medias de origen no indígena se sienten cosmopolitas y los apellidos extranjeros abundan y a nadie le llama la atención el gran número de apellidos alemanes, austriacos, croatas, italianos, libaneses, japoneses... y ahora brasileros y argentinos. De las 20 personas entrevistadas, solo dos expresaron su disconformidad con la extranjerización de la propiedad de la tierra. Sin embargo, conviene recalcar que a diferencia de otros países de Latinoamérica, en Bolivia los indígenas no fueron exterminados y por el contrario constituyen la mayoría de la población, especialmente en la zona andina. Estos pueblos indígenas -tanto

de tierras bajas como de tierras altas- están organizados, movilizadas y tienen el poder del Estado desde hace cinco años y la nueva CPE les otorga derechos preferenciales sobre los territorios y sus recursos naturales. Los indígenas si perciben que esas tierras y territorios les pertenecen y que los extranjeros recién llegados les están quitando lo que hace dos siglos les usurparon los descendientes de los españoles.

En el oriente, existe una especie de pacto étnico regional entre productores agropecuarios, sojeros, cañeros, ganaderos, forestales -bolivianos de origen o de nacionalización reciente- y los pueblos indígenas de las tierras bajas. Y en su confrontación regional con el gobierno del MAS y con los indígenas quechuas y aymaras, exacerbada en los últimos años por un uso discrecional de algunos medios de comunicación local (TV) , el “*enemigo*” común es el indígena andino, el campesino, el colonizador que viene de las tierras altas sin permiso ni autorización, al cual se le achacan todos los males, desde la producción de la hoja de coca, el narcotráfico, el chaqueo, la quema indiscriminada y el avasallamiento de tierras, hasta la imposición de valores políticos centralistas, autoritarios y de pautas de conducta ajenas al medio local. En este escenario no sorprende que hasta hoy los inversionistas extranjeros, brasileros o argentinos, sean considerados aliados de esta causa regional. Por esto es que, especialmente en las clases medias de Santa Cruz, la presencia extranjera es bien vista, deseada, esperada...porque así hay a quien venderle tierras recibidas del Estado, porque de esa manera llega capital, tecnología, empleo, fuentes de trabajo, conocimiento de mercados, insumos y variedades de semillas genéticamente modificadas que “*son más rentables*”. En la ciudad de Santa Cruz, en general no se percibe que exista problema con los extranjeros, con los brasileros o los argentinos, menos con los japoneses que ya están hace medio siglo o los menonitas que viven aislados en sus colonias. El problema de acceso a la tierra y control de los recursos naturales en el oriente es con los inmigrantes bolivianos de origen indígena quechua y aymara, contra quienes se practica cotidianamente diversas formas de racismo y discriminación.

La principal preocupación de los agropecuarios nacionales, especialmente medianos y grandes, es consolidar sus derechos de propiedad sobre las tierras que poseen y trabajan. Muchos de ellos se quejan de que durante la última gestión de gobierno algunos funcionarios regionales del INRA departamental y algunos asesores de Palacio de Gobierno en La Paz cobran comisiones (coimas) para agilizar sus trámites y por la obtención de las firmas de las autoridades nacionales que certifiquen sus derechos. Dicen que parlamentarios y militantes del partido de gobierno son “*tramitadores*” de favores ante las autoridades superiores. Sin embargo, no existen denuncias formales de estas quejas. Por todo lo anterior el

tema de la extranjerización de la tierra no es visto o percibido en Santa Cruz como un problema. Por eso también es que los partidos políticos, tanto oficialistas como opositores -por el momento- no tienen posición sobre el tema.

La opinión de los sectores populares respecto del agronegocio sojero y de la hegemonía brasilera, es heterogénea. Los campesinos-colonizadores integrados al proceso “exitosamente” -cerca de 10.000 familias que cultivan el 5% de la superficie total de la soya- se benefician de las innovaciones de los grandes, que copian y adaptan a sus condiciones. Este sector de pequeños productores sojeros capitalizados -importante numéricamente pero marginal en términos de superficie y producción total- está intentando crear sus propias instancias de representación, independizarse de ANAPO y (con el apoyo de instituciones como PROBIOMA) reafirmarse en su rol de productores ecológicos que no usan semilla transgénica. Sin embargo, los pequeños productores de soya desde el año 2006, si bien dependen menos de los grandes proveedores privados de insumos, dependen más del mercado cautivo que tienen con Venezuela mediante el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) en el marco de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA). Las operaciones de comercio exterior de pequeños productores sojeros ecológicos promovidos por el gobierno nacional para conquistar acceso al mercado venezolano, no están aún consolidadas; al contrario, los colonizadores andinos productores de soya en Santa Cruz encuentran múltiples obstáculos como la inexistencia de silos estatales, el desfase o tardanza en el pago, el desconocimiento del funcionamiento del mercado por parte de los operadores públicos, además concentrados en la ciudad de La Paz, a más de mil kilómetros de distancia (Suárez, PROBIOMA 2010).

Aunque los pequeños productores de soya están sometidos a los proveedores de insumos y a los compradores y almacenadores de la soya en grano, aún así su actividad es rentable y les permite lograr excedentes y acumulación. Sin embargo, por su falta de capital propio, dependen del crédito que les otorgan los importadores de insumos, no obstante algunos han logrado adquirir tractores, camionetas o camiones, contratan alguna mano de obra estacional y se han capitalizado. Además, los más exitosos están comprando tierras a sus vecinos, ampliando paulatinamente sus predios y cambiando su estatus. Tienden a ser medianos productores.

Es un hecho relevante que ahora (2010-2011) el máximo dirigente de ANAPO sea un exitoso originalmente colonizador inmigrante de los andes. No es casual que este notable cambio en el liderazgo de uno de los más importantes gremios de productores empresariales de Bolivia, antes monopolizado por las elites departamentales, ocurra durante un gobierno que se proclama popular indígena, ya que

esto facilita las negociaciones que recientemente han emprendido el gobierno nacional, los productores de soya y otros productores agropecuarios (maíz, trigo, arroz y especialmente caña de azúcar) en torno a un “pacto productivo”. Aunque su aporte al volumen total de la producción nacional es casi marginal, los pequeños productores de soya son parte del modelo agroexportador y se organizan para obtener mayores cuotas de representación, mejor poder de negociación e incrementar así sus márgenes de ganancia. En cambio, los que no participan del negocio sojero, indígenas con territorios colindantes, otros campesinos con poca tierra que no cultivan soya, algunas ONG, instituciones conservacionistas, movimientos sociales...critican el modelo agroexportador y su extranjerización porque favorece la concentración de la tierra y el deterioro ambiental. No obstante, -más allá de las declaraciones de algunos dirigentes sociales y funcionarios de gobierno- en realidad no hay un movimiento popular contrario al agronegocio y tampoco contra los efectos de la extranjerización de la tierra. Los grandes y medianos productores nacionales de soya se lamentan de que las mejores tierras estén en manos de los brasileros y últimamente de los argentinos, pero se olvidan que fueron ellos quienes se las vendieron o se las alquilan.

### 5.3. El empleo y la pobreza

Según ANAPO, el cultivo de la soya estaría generando cada año cerca de 70 mil empleos directos y 30 mil indirectos, sin embargo estas cifras parecen estar infladas y no se conoce un sustento empírico. Sin duda que cerca de un millón de hectáreas sembradas de soya y otras oleaginosas y granos (40% del total de la superficie sembrada en Bolivia) generan un conjunto amplio de externalidades, entre ellas empleo y consecuentemente ingresos en la población de cualquier región. Sin embargo, no existen estudios que midan el impacto específico del cultivo de la soya en el empleo y en el nivel del ingreso de la población rural local, menos aún sobre la distribución de la renta del negocio sojero y sus efectos concentradores (o no) de la riqueza y el control de los activos, en especial de la tierra.

El cuadro 8 muestra cómo -durante la década 1992-2001- los municipios sojeros (al Este los municipios de San Julián, Cuatro Cañadas y Pailón, y al Norte los municipios de San Pedro, Fernández Alonso y Mineros) han incrementado muy rápidamente (notablemente) su población como efecto del desarrollo de la agroindustria sojera. En general los municipios de la región Este -que son los que más rápidamente han crecido en cantidad de población (53% en apenas 10 años)- tienen mayor número de pobres rurales, comparados con los municipios de la zona Norte.

Si bien en ambas zonas la población rural pobre ha disminuido muy significativamente, el ritmo de disminución ha sido menor en los municipios del Este.

No existen datos para analizar el comportamiento de la última década (2001-2010). No obstante, si la tendencia anterior se mantuviera constante (acelerado aumento de la población total acompañada de disminución de la proporción de la población rural en estado de pobreza), se estaría demostrando que -a pesar de lo señalado reiteradamente en este ensayo- el modelo agroexportador generaría externalidades positivas para la región al proveer empleo e ingresos que permiten salir de esta categoría a una proporción significativa de pobres rurales. Los aproximadamente 10 mil pequeños productores de soya -con un promedio de unas 50 hectáreas cultivadas por familia- serían beneficiarios locales de la expansión del cultivo en las últimas dos décadas -en gran medida al influjo de la inversión brasilera- y explicaría en alguna forma la notable disminución de la población rural pobre.

**Cuadro N° 8**  
**Crecimiento poblacional y reducción de la pobreza en los municipios soyeros**

Zona	Datos poblacionales	1992	2001	Variación 1992 -2001
Este	Población rural pobre	29,984	34,415	14.8%
	Población total	36,297	55,601	53.2%
Norte	Población rural pobre	14,618	12,593	-13.9%
	Población total	34,452	45,853	33.1%
Este	Población rural pobre	82.6%	61.9%	-25%
	Población total	100.0%	100.0%	0%
Norte	Población rural pobre	42.4%	27.5%	-35%
	Población total	100.0%	100.0%	0%

Fuente. Elaboración propia en base a datos del Atlas Estadístico de Municipios (2005) con datos de Censo 2001 y encuestas de hogares del INE.

#### 5.4. El territorio y la inseguridad alimentaria

En general, la modalidad de cultivo de los grandes productores de soya en Bolivia -nacionales y extranjeros- se caracteriza por el uso de una tecnología altamente mecanizada, siembra directa, aplicación creciente de semilla transgénica y alta dosificación de fertilizantes y pesticidas. En nuestra observación de campo hemos comprobado que cuanto más grande es la extensión de la tierra cultivada de soya por los grandes productores, proporcionalmente menos mano de obra se contrata, menos empleo se genera, menos impacto contra la pobreza local se consigue. Este modelo de enclave de la gran empresa latifundiaría soyera que tiene como única razón de ser el agronegocio, no construye territorio local ya que no necesita de él. El cultivo de la

soya en gran escala se basa en muy extensas plantaciones donde el empleo directo de mano de obra es mínimo (choferes, mecánicos, ayudantes...). Este modelo de gran plantación no necesita de gente, por lo tanto tampoco necesita generar dinámicas territoriales de desarrollo rural.

Tampoco contribuye a la seguridad alimentaria local ni nacional. Al contrario, el agronegocio de monocultivos de exportación conspira contra cualquier idea de seguridad alimentaria (menos aún de soberanía) ya que su objetivo, alcanzar el mercado externo de *commodities*, fuerza a la especialización productiva puesto que los cultivos de rotación, especialmente, sorgo, arroz o maíz, tienen precios internacionales más bajos que la soya y por tanto son menos atractivos ante la alternativa de sembrar siempre soya, aún a riesgo de dañar la fertilidad de la tierra de manera casi irreversible. *“La soya se instala en Bolivia como un cultivo globalizado y una de sus características fundamentales es que está controlado por inversionistas extranjeros”... “Un porcentaje muy pequeño de productores (3%) detenta casi el 56% de la tierra destinada al cultivo”* (Suarez, PROBIOMA 2010). A diferencia de la Argentina, donde el 70% de las explotaciones serían familiares, generan el 60% del empleo rural y el 25% de la producción total del país (Murmis 2010).

En el departamento de Santa Cruz, como en casi todo el país, no se aplican políticas públicas regionales orientadas efectivamente a generar empleo rural, a disminuir la pobreza en el campo y menos asegurar la alimentación de la población local. Especialmente en el oriente, desde hace casi tres décadas, la orientación de las políticas de empleo y desarrollo rural están subordinadas al principio de “hacer negocio”, que generalmente acaba concentrado en manos de grupos económicos reducidos y en algunos casos además encadenados (acceso a la tierra, cultivo, financiamiento, provisión de insumos agropecuarios, almacenamiento, transformación -aceite-torta-cascarilla, exportación). Se podría afirmar que la agudización de la crisis de precios e inseguridad alimentaria que vive Bolivia desde hace unos seis meses (octubre 2010-marzo 2011) tiene sus orígenes -entre otras cosas- en el modelo del agronegocio sojero, en la especialización productiva y de las exportaciones estimuladas por los atractivos precios de la soya en el mercado internacional. Esto ha conspirado hacia la baja de la producción de otros cultivos alimenticios en la región, como el arroz, el maíz y el trigo (y la caña de azúcar en otras regiones). Es una paradoja que después de cinco años de gobierno revolucionario y en pleno proceso de reforma agraria, se mantenga intacto el modelo del agronegocio -concentrador de la tierra y del poder económico- a pesar del tímido intento del gobierno por establecer cupos que limiten las exportaciones para así favorecer los mercados internos y la diversificación productiva.



## 5.5. Los principales grupos brasileros

Generalmente los agricultores brasileños actúan en grupos organizados, especialmente para intercambiar tecnología y para comercializar su producción, es decir, para negociar mejores precios con los industriales que compran el grano. La llegada de estos agricultores trajo consigo tecnologías para mejorar semillas, la siembra directa y el mejor control de plagas. Estos agricultores promovieron el apoyo tecnológico de instituciones brasileras como la EMBRAPA y la Fundación Mato Grosso, entidades pública y privada, respectivamente, destacadas en la investigación y promoción de mejoras tecnológicas en la producción agrícola en el vecino país.

El Grupo Mónica, que fue el primer grupo sojero importante que llegó a la zona el año 1992 compró 2 propiedades en el Este y una en el Norte, actualmente cultivaría alrededor de 50.000 hectáreas de soya anuales en sus tres propiedades. Este grupo tendría en Brasil un cultivo de 25.000 hectáreas anuales. El grupo Gama estaría compuesto por el subgrupo Sojima, y el subgrupo Tierra azul. Este Grupo tendría un cultivo aproximado de 90 mil a 100 mil hectáreas. Este sería el grupo brasileros más grande y tendría inversiones tanto en la zona del Norte como en la zona del Este de Santa Cruz. El grupo UNISOYA estaría compuesto por productores de soya de diversa nacionalidad donde prevalecen agricultores brasileros y están en el Norte con una extensión cultivada aproximada de 50 mil ha. Entre estos tres grupos más renombrados de agricultores brasileños cultivarían anualmente aproximadamente 200 mil ha. No todas las tierras cultivadas por estos grupos serían de su propiedad, ya que en una menor parte serían arrendadas de agricultores nacionales a un precio promedio de 80 dólares por hectárea por campaña. En la región del Norte las tierras y el clima admiten dos campañas por año, por lo que el precio por el alquiler es el doble.

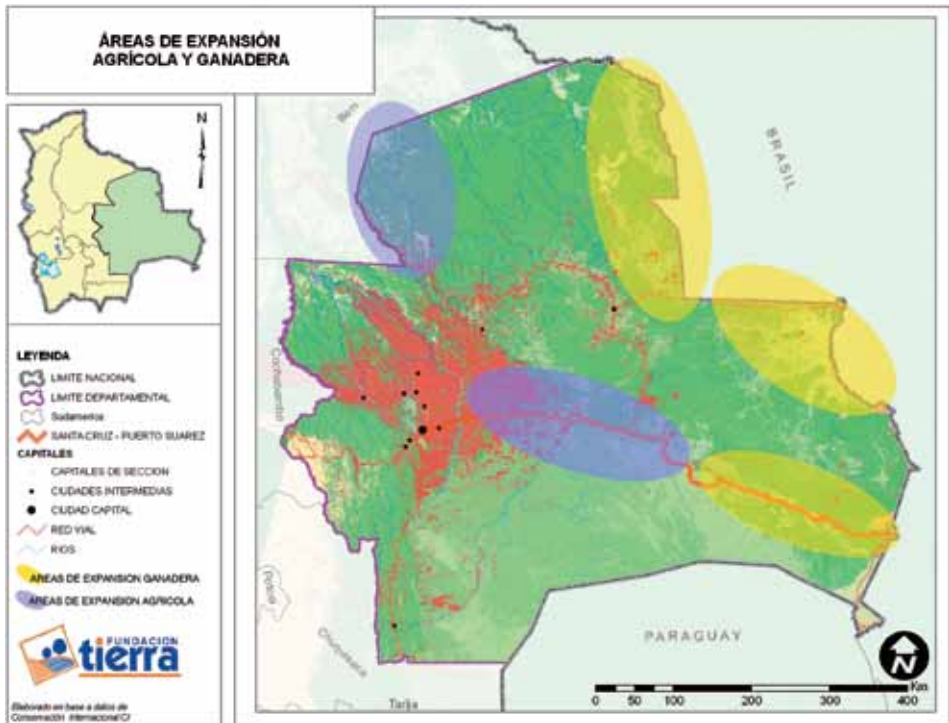
Parece que algunos argentinos invierten en representación de grandes firmas que no tienen registros de operaciones en Bolivia. Otros lo harían a título individual o en representación de grupos familiares. Entre los principales grupos argentinos, tendrían la propiedad de unas 100 mil hectáreas.

## 5.6. Los brasileros ahora compran tierras de vocación ganadera

La nueva ola de brasileros que compran tierras de uso ganadero, estaría constituida por antiguos productores agrícolas (los que iniciaron con éxito el cultivo de la soya desde 1993 y que ahora expanden su negocio) y nuevos inversionistas ganaderos que empezaron su entrada a Bolivia a partir del año 2000 y van tomando posesión de sus tierras en las tres provincias fronterizas cruceñas con Brasil:

la provincia Germán Bush, la provincia Velasco y la provincia Ángel Sandoval. A partir de entrevistas, observación sobre el terreno y recolección de información dispersa, aunque no oficial, se puede estimar que en estas tres provincias habría aproximadamente unas 700 mil hectáreas en manos de ganaderos brasileños. Con los antecedentes antes citados sobre la ya importante presencia de agricultores brasileños en Santa Cruz, su renovada presencia tiende a extenderse a la actividad ganadera; si bien la tierra disponible para el cultivo de la soya habría llegado a su techo, por lo menos para las variedades de soya que se conocen; todo indica que el próximo rubro para la expansión de la inversión brasileña en Bolivia sería la ganadería, y para ello ya se han dado los primeros pasos, como ocurrió antes en el caso de la soya, con la compra de tierra en las provincias fronterizas.

**Mapa N° 6**  
**Áreas de expansión agraria y ganadera en Santa Cruz**



El siguiente paso que ya se ha iniciado es la habilitación de extensos cultivos de pasto para la cría de ganado vacuno. En la provincia Velasco inversionistas

brasileros están instalando un gran matadero frigorífico que –por sus dimensiones– parecería que está destinado principalmente a la exportación de carne. Los inversionistas brasileros en las provincias cruceñas fronterizas con el Brasil, así como en la provincia Marbán del Beni, habrían comprado de los bolivianos más de 700 mil hectáreas de tierras con vocación ganadera. Las áreas de expansión agrícola y ganadera se muestran en el Mapa 6.